D

ebido a la naturaleza humana, siempre existe la posibilidad de actos ilegales o contrarios a la técnica. Por muy buenos que sean los controles internos, siempre las autoridades de la organización pueden engañarlos u omitirlos. Por más que los auditores sean muy cuidadosos, existe la posibilidad que no adviertan hechos incorrectos. Con todo y su poder y la capacidad de examinar a varios vigilados simultáneamente, es factible mantener engañadas a las autoridades de supervisión, por lo menos hasta cuando ya no haya nada que hacer para impedir daños. Es decir: la humanidad no tiene a su disposición un método para evitar en todo caso las acciones indebidas. Mal pueden algunas autoridades gubernamentales, de supervisión o disciplinarias, juzgar desde el supuesto que las personas diligentes siempre habrían impedido ciertos sucesos.

Se ensayan varias estrategias para descubrir los actos reprochables. Una muy eficaz son las denuncias. Sin embargo, las autoridades, so pretexto de impedir difamaciones, las llenan de trámites y condiciones. Es bien sabido que el denunciante de un superior la lleva perdida. En primer lugar, porque las organizaciones tienden a proteger a sus directivos (es decir, los directivos se auto protegen). En segundo lugar, porque los denunciantes quedan generalmente expuestos a múltiples represalias, algunas tan sutiles que se hace muy difícil demostrar su efecto. Muchos directivos descalifican anónimos, sin tomarse el trabajo de averiguar si en ellos hay algo de verdad.

Algunas organizaciones tratan de asegurar que impedirán las represalias, comprometiéndose a la protección del denunciante. James Wainberg y Stephen Perreault, en su artículo [Whistleblowing in Audit Firms: Do Explicit Protections from Retaliation Activate Implicit Threats of Reprisal?](http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/bria-51122) (Behavioral Research in Accounting, 2016, Vol. 28, Issue 1, p83-93. 11p. 1 Diagram, 3 Charts) resumieron: “(…) *Despite the increasing number of statutory protections now provided to whistleblowers, fear of reprisal remains a primary reason why individuals fail to report misconduct. In order to alleviate such fears and encourage reporting, hotline policies often describe explicit whistleblower protections from specific types of retaliation (e.g., harassment, threats or intimidation, loss of job, etc.). However, we posit that such vivid descriptions may actually achieve the opposite of their intended effect by increasing the salience of retaliatory threats, thereby discouraging whistleblower reporting. We conduct an experiment and find evidence that when explicit protections are added to an audit firm’s whistleblower hotline policy, auditors assess the risk of reporting as higher and, as a result, are less likely to indicate that the misconduct will be reported through the hotline. To our knowledge, our study is the first to demonstrate that offering explicit protections to whistleblowers can have these unintended and counter-intuitive consequences.* (…)”. De manera que la protección de los auditores es un tema no resuelto, en el que hay que trabajar.

*Hernando Bermúdez Gómez*